

2

NARCOTRÁFICO. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO

*Mario Arroyo Juárez¹
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara²*

El narcotráfico es un tema que ha estado presente en la realidad mexicana por más de cuatro décadas, aunque nunca con la primacía que ha ocupado desde el inicio de este siglo. La estrategia emprendida por los dos últimos gobiernos, principalmente el del presidente Felipe Calderón, de enfrentamiento directo ha modificado drásticamente la agenda política y de seguridad nacional, así como la realidad cotidiana de gran parte de la sociedad mexicana, sea de forma directa, en aquellos estados trastocados por la violencia, o por la saturación mediática del problema hacia toda la población, no importando si se vive en un lugar de alta conflictividad o no.

Así, los temas de seguridad y narcotráfico han penetrado en la esfera diaria de pensamiento, comunicación y convivencia de una forma tan estrecha que ha propiciado la generación de opiniones y posturas sobre las condiciones actuales y del futuro del país. Estas percepciones moldean tanto el imaginario colectivo sobre el cual se sustenta parte importante de las decisiones personales y sociales, como los hábitos cotidianos de la población y la aprobación o rechazo de una política pública o del gobierno.

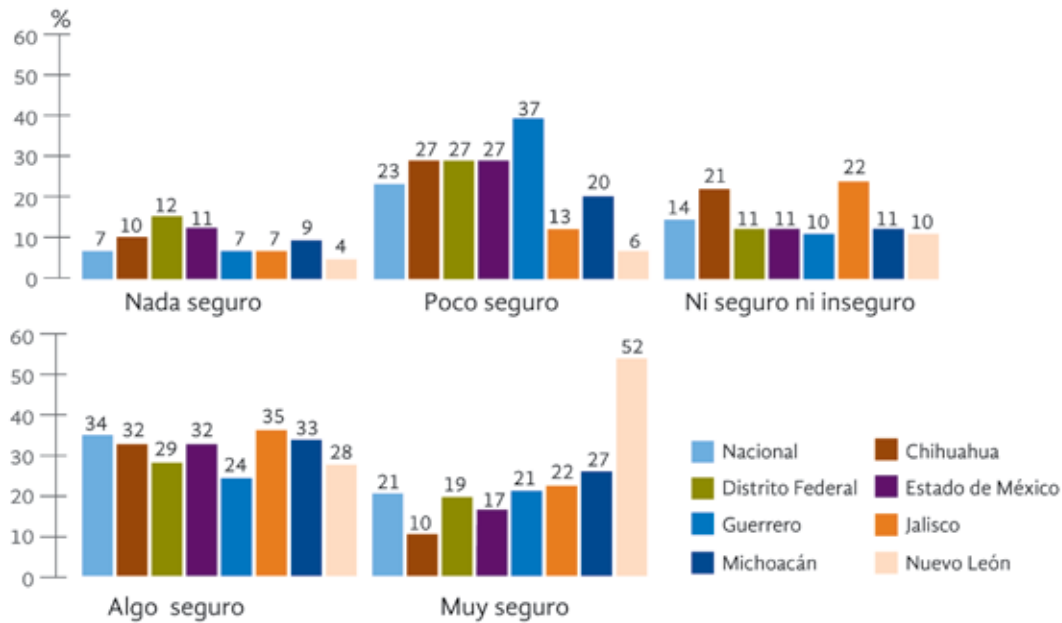
¹ Especialista en Política Criminológica y miembro de CASEDE.

² Especialista en Seguridad Nacional y miembro de CASEDE. Agradecemos a Tania Evelyn Sánchez por su colaboración en la realización de este artículo.

Las fuerzas armadas en las calles

Uno de estos cambios es la constante presencia de las fuerzas armadas en las calles de algunas ciudades, cumpliendo un rol de respaldo de la seguridad pública, lo que las lleva a tener un contacto directo con la ciudadanía. Por este motivo, una de las variables que mide la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviencia (CIDENA) 2011*³ se encuentra la percepción de seguridad que la población tiene debido a la presencia del ejército y la armada. A nivel nacional, el 55 por ciento de los encuestados manifestó sentirse muy seguro o algo seguro con las tropas en las calles, mientras que el 7 por ciento declaró sentirse nada seguro. Al igual que en otros rubros de la encuesta, en este tema existen diferencias regionales importantes. Dentro de los ciudadanos que se sienten muy seguros en presencia de los militares destaca Nuevo León, con un 52 por ciento, Michoacán 27 por ciento y Jalisco 22 por ciento. Por el contrario, los que manifestaron sentirse nada seguros, encabezan la lista el Distrito Federal 12 por ciento, Estado de México 11 por ciento y Chihuahua 10 por ciento. Hay que tener presente que el Distrito Federal y el Estado de México tienen muy poca actividad real de los cárteles y no hay despliegue de fuerzas militares.

Cuadro 1
¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

³ Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviencia (CIDENA), 2011*. 7,416 entrevistas a nivel nacional. Margen de error de +/- 1.1% con un 95% de confianza. Véase la encuesta completa en www.seguridadcondemocracia.org.

Para situar en contexto esta pregunta y otras relacionadas con la violencia generada por la delincuencia organizada es necesario considerar que las respuestas de los entrevistados pueden variar en función de que existan o no *operativos conjuntos* en sus lugares de residencia. Como los define el propio gobierno, estos operativos son:

[...] Mecanismos implementados por el gobierno federal para combatir al crimen organizado y que se fundamentan en el principio de subsidiariedad propio de cualquier sistema federal. Es decir, cuando un gobernador estima que requiere el apoyo de las fuerzas federales para garantizar la seguridad en su territorio se diseña la manera en la que elementos de las distintas corporaciones del gobierno federal se desplegarán para atender esta petición. Los elementos asignados a los operativos brindan soporte en áreas de inteligencia, administración y procuración de justicia. El objetivo es que se fortalezcan las regiones correspondientes y se genere mayor capacidad de contención de la acción delincriminal. Son esfuerzos de cooperación con la autoridad local y no de suplantación de la misma.⁴

Estos operativos incluyen fuerzas combinadas de instituciones federales, como lo son la policía federal, el ejército y la armada, así como también en ocasiones otras fuerzas federales y estatales. También existen varios casos en que los operativos se realizan por fuerzas federales para sustituir a policías estatales o municipales “contaminadas” e infiltradas parcial o totalmente por los carteles. En este último caso, incluso en ocasiones ha habido enfrentamientos armados entre las policías que se resisten y las fuerzas militares.

De los estados que incluye CIDENA 2011 existían al momento del levantamiento de la encuesta *operativos conjuntos* en Guerrero y Michoacán; en Chihuahua uno dedicado exclusivamente a Ciudad Juárez y otro como parte de un esfuerzo regional denominado Triángulo Dorado, que también incorporó a los estados de Sinaloa y Durango. Nuevo León, por su parte, también contaba al momento de realizar la encuesta con el Operativo Noreste, que incluía también a Tamaulipas. En el caso de Jalisco, si bien no existía en 2011 ningún *operativo conjunto*, tuvieron lugar acontecimientos que generaron la presencia de fuerzas federales, destacando la organización de los Juegos Panamericanos en la zona metropolitana de Guadalajara.

Otra consideración es que para los encuestados, el sentirse *muy seguros* o *nada seguros* no depende sólo de la presencia militar, sino de las condiciones reales y subjetivas que prevalecen en los estados y en el Distrito Federal en al menos tres rubros: percepción de la seguridad, criminalidad registrada y victimización. Al respecto, CIDENA 2011 realizó varias preguntas que arrojan resultados comparables con otros estudios, pero también se desprenden hallazgos que abren nuevas perspectivas de análisis en torno a la percepción de la inseguridad y la modificación de conductas de los ciudadanos producto del *miedo al delito*. En este caso, la legislación mexicana y el gobierno se refieren a los actos de las personas involucradas en actividades criminales de tráfico de drogas o violencia como “delitos contra la salud” y “delincuencia organizada”, aunque los medios comúnmente mencionan el nombre genérico de narcotráfico.

⁴ Presidencia de la República, México, en www.presidencia.gob.mx/el-blog/los-operativos-conjuntos (consultada el 15 de marzo de 2012).

Por ejemplo, mientras que a nivel nacional el 61 por ciento declaró haber dejado de salir de noche por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico, fue en los estados con *operativos conjuntos* o que tuvieron presencia de fuerzas federales donde se registraron los porcentajes más altos de temor: Chihuahua con 76 por ciento; Nuevo León con 70 por ciento; Guerrero, Jalisco y Michoacán con 67 por ciento.

Narcotráfico y vida cotidiana

La modificación de conductas o el cambio de rutina en algunas actividades cotidianas es uno de los principales aspectos de la vida social que se ven afectados negativamente cuando existen situaciones de violencia o de una percepción generalizada de ésta. Lo que una persona deja de hacer por miedo es un reflejo directo de lo que la gente más valora, ya que al temer perder algo se prefiere reducir movilidad, frecuencia en las relaciones sociales o cambiar patrones de diversión, esparcimiento o consumo.

Cuadro 2
Por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante 2011 dejó de... (porcentaje)

	Nacional	Distrito Federal	Estado de México	Guerrero	Jalisco	Michoacán	Nuevo León	Chihuahua
Salir de noche	61	52	54	67	67	67	70	76
Salir a caminar a ciertas horas	49	48	48	45	40	48	63	67
Salir a cenar o divertirse	27	33	35	32	18	38	53	53
Ir al cine, conciertos o eventos deportivos	22	27	29	28	15	31	47	47
Tomar un taxi	22	38	31	22	15	26	35	44
Usar transporte público	15	25	26	16	13	24	31	38
Visitar ciertas zonas de la ciudad o localidad	42	42	42	43	21	43	54	53
Visitar parientes o amigos de su ciudad	35	33	34	39	18	48	49	40
Visitar parientes o amigos en otra ciudad	33	29	29	35	15	41	46	35
Salir a carreteras federales o estatales	30	30	27	26	14	40	48	34

Fuente: Elaboración propia con datos de CIDENA, 2011.

Incluso la misma crianza de los hijos y las rutinas familiares cambian como producto directo del temor a la delincuencia. En este sentido, el 49 por ciento de los entrevistados manifestó que por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico no permitió que durante 2011 sus hijos salieran a la calle. Este porcentaje se elevó a 67 por ciento en el caso de Chihuahua, 63 por ciento en Nuevo León y 48 por ciento en Michoacán.

La percepción de inseguridad se ve reflejada también en los niveles de preocupación que genera la violencia del enfrentamiento entre los carteles. Destaca el alto porcentaje (92%) de los entrevistados en Nuevo León que manifestaron sentirse preocupados por este tipo de violencia relacionada con el narcotráfico. En Michoacán fue de 85 por ciento y en el Estado de México con 83 por ciento. Estos tres estados estuvieron por encima del 80 por ciento, que fue la media nacional.

¿Quién va ganando la guerra al narcotráfico?

Uno de los puntos más polémicos en el debate público es cómo nombrar al conflicto que se vive en México en relación con la violencia generada por la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas. En su momento inicial en 2007, el presidente Calderón definió el problema como una “guerra contra el narcotráfico”, aunque luego de múltiples críticas al discurso bélico y por el empleo constante y creciente de las fuerzas armadas en labores policiales, el presidente decidió darle un giro conceptual y fue sustituida la palabra de “guerra” por lo que denominó “La lucha por la seguridad pública”. En una declaración singular en el año 2010, presentada como desplegado en medios impresos y después reforzada con un mensaje en cadena nacional, el presidente Felipe Calderón aclaró que:

La lucha es, pues, por la seguridad pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción generalizada de que el objetivo del gobierno es “combatir el narcotráfico”. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una “guerra contra el narco” o “la lucha antinarco”. Esto, sin embargo, no es así. Nuestro objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado, porque es nuestra obligación constitucional y ética, porque es obligación del gobierno federal hacerlo, pero también y fundamentalmente porque el crimen organizado ha alterado, de manera significativa, la paz de los ciudadanos.⁵

Como parte y haciendo eco de la percepción generalizada a la que se refiere el presidente Calderón, la Encuesta CIDENA preguntó si el gobierno está o no ganando la guerra contra el narcotráfico. A nivel nacional el 53 por ciento señaló que el gobierno federal no

⁵ Véase *Excelsior*, México, 16 de junio de 2010.

está ganando la guerra; el 26 por ciento considera que sí la va ganando y 18 por ciento considera que ni la va ganando ni la va perdiendo. También resulta interesante contrastar las opiniones de los ciudadanos con las de algunos especialistas en seguridad, que reflejan tres versiones de “la guerra contra el narcotráfico”: la optimista, la del fracaso y la del empate estratégico.

La visión optimista

La visión que le otorga legitimidad a la estrategia gubernamental, además por supuesto de las declaraciones oficiales, está principalmente representada por Joaquín Villalobos, quien en una serie de artículos⁶ ha planteado argumentos a favor, hasta cierto punto de justificación y racionalización positiva, de la estrategia del presidente Felipe Calderón. En uno de sus más recientes ensayos, Villalobos opinó que:

Se habla de “guerra perdida” porque erróneamente se piensa que la lucha de México es por combatir el narcotráfico, cuando de antemano se sabe que eso no es posible, porque mientras haya demanda existirá oferta. La lucha es en realidad por mejorar la seguridad de los mexicanos. [...] Indiscutiblemente, la estrategia del gobierno federal no es perfecta y requiere un esfuerzo de revisión y mejora constante, pero está asentada en cuatro pilares que no admiten discusión y cualquiera que gobierne a México necesitará continuarlos: reducir al máximo la densidad criminal; recuperar autoridad sobre los territorios que están en situación crítica; fortalecer las instituciones de seguridad y justicia; y alentar cambios cívicos en la conducta de los ciudadanos.⁷

La visión derrotista

Del otro lado está la visión que sostienen, entre otros, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, afirmando que la guerra contra el narcotráfico no está solucionando los principales problemas que el gobierno mexicano identificó al momento de emprender su estrategia, convirtiéndola en una “guerra fallida”. De acuerdo con estos autores, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico México sigue siendo un país de tránsito de droga y el grado de consumo en el país no se ha reducido sino que, por el contrario, en algunos lugares ha aumentado. Asimismo, el alto grado de consumo en Estados Unidos, principal factor que alimenta a los cárteles mexicanos, también se ha mantenido constante, sin presentar una disminución significativa en los últimos años.

De la misma forma, el propósito de erradicar la violencia asociada al narcotráfico ha fallado, ya que el clima de violencia actual es superior del que se pretendía combatir. Por estas razones, Castañeda y Aguilar sostienen que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado, y es solamente mediante otro tipo de estrategia como se pueden minimizar los efectos nocivos de este fenómeno.⁸

⁶ Véase Joaquín Villalobos, “Diez mitos”, *Nexos*, enero, 2010.

⁷ *Íbidem*.

⁸ Véase Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, *El narco: la guerra fallida*, México, Punto de Lectura, 2009.

Empate estratégico

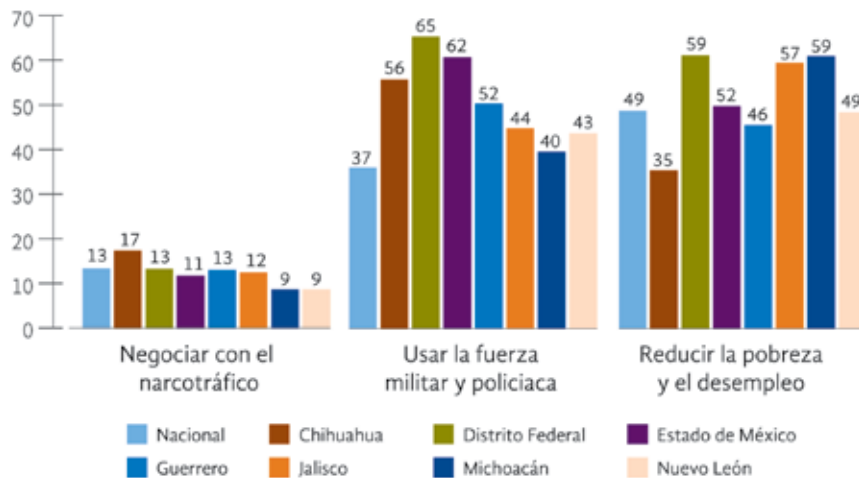
En una versión más mesurada, Raúl Benítez Manaut concluye en un ensayo que “es difícil afirmar categóricamente que el gobierno está *ganando la guerra*, pero también afirmar que *ya fracasó* la estrategia gubernamental es una hipótesis que no se sostiene. Por ello, se observa un *empate estratégico*, que se balanceará hacia una u otra dirección según tengan éxito las grandes campañas militares del gobierno y la estrategia de reestructuración de todas las instituciones de seguridad nacional, o si los cárteles, en sus reorganizaciones y en los enfrentamientos entre ellos, logran superar las adversidades e imponerse”.⁹

En esta visión se desprende la idea de que ambas partes tienen posibilidades de inclinar la situación a su favor, de acuerdo con las acciones y estrategias que desarrollen, pero sostiene la posibilidad de que el Estado mexicano pueda dar un viraje y así lograr avanzar en la guerra a las organizaciones criminales.

Las soluciones propuestas

Las diferencias en torno a la percepción sobre quién gana la guerra contra las drogas se acercan más a una posición de consenso cuando se trata de definir posibles soluciones para resolver el problema del narcotráfico. El 49 por ciento a nivel nacional afirma que reducir la pobreza y el desempleo es la mejor solución. Por el contrario, utilizar la fuerza militar y policiaca es una opción considerada por el 37 por ciento de los entrevistados. Sin embargo, una posición minoritaria pero importante del 13 por ciento sostiene que negociar con el narcotráfico sería una mejor salida.

Cuadro 3
¿Cuál sería la mejor estrategia para solucionar el problema del narcotráfico?



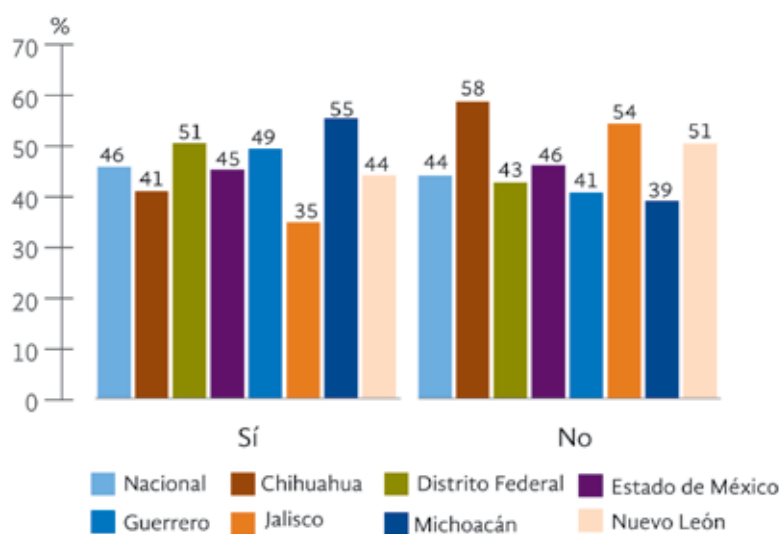
Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

⁹ Raúl Benítez Manaut, “Seguridad nacional, crimen organizado y elecciones: tendencias”, *Este País*, vol. 20, núm. 245, septiembre de 2011, p. 18.

No negociar ha sido reiterado por el gobierno federal. El Presidente Calderón sentenció ante líderes del país que el gobierno federal “no ha negociado ni negociará con organización criminal alguna”.¹⁰ El nivel de acuerdo con esta posición es coincidente con el 65 por ciento de los entrevistados, que prefieren estar más de acuerdo en “votar por candidatos que combatan al narcotráfico aunque genere más violencia e inseguridad”.

La Encuesta CIDENA 2011 realiza, en lo referente a la relación entre violencia y narcotráfico con la democracia, una pregunta crucial: si la lucha o combate al narcotráfico puede obstaculizar la consolidación de la democracia en el país. La mayoría (46%) considera que sí se puede afectar la evolución democrática, aunque un porcentaje muy similar (44%) considera que no (cuadro 4). A nivel estatal los valores que destacan son los de Michoacán y Chihuahua. Para el 55 por ciento de los michoacanos entrevistados, el combate al narcotráfico sí representa un obstáculo para la democracia; mientras que la mayoría de los chihuahuenses entrevistados (49%) considera que este combate no es obstáculo alguno. Aquí sobresale que ambos estados han estado acosados de forma constante por la violencia en los últimos cinco años y que precisamente el primer gran operativo militar ordenado por el presidente Calderón en enero de 2007 tuvo lugar en Michoacán.

Cuadro 4
¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia en el país?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Al margen de que estos resultados deben analizarse con mayor cuidado y de que es preciso reflexionar sobre lo que los entrevistados entienden por “consolidación de la

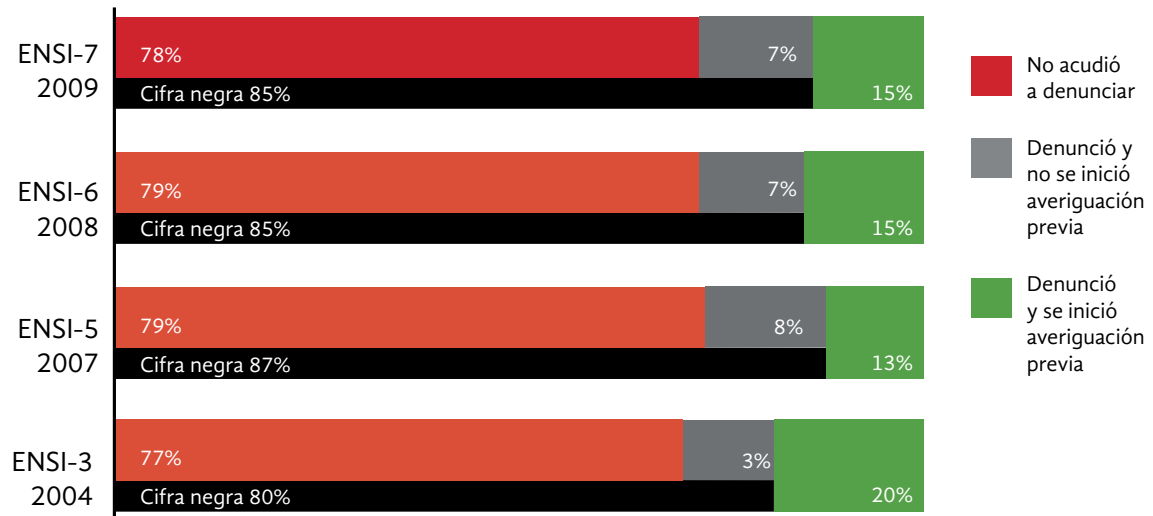
¹⁰ *El Universal*, 1º de diciembre de 2008, en www.eluniversal.com.mx/primer/32073.html

democracia”, llama poderosamente la atención que en Michoacán el tema de la intromisión del narcotráfico en la vida cotidiana es percibida por los ciudadanos como un riesgo y una constante. Por el contrario en Chihuahua, a pesar de que los índices de violencia (medidos sobre todo a través de las tasas de homicidios) son mucho más elevados, la ciudadanía no relaciona al narcotráfico como un actor relevante que afecte la vida democrática.

Desconfianza ciudadana, seguridad y democracia

Una de las principales razones por las cuáles las personas que han sido víctimas de un delito no denuncian es la desconfianza hacia las instituciones. Los resultados de las *Encuestas Nacionales de Inseguridad (ENSI)* que realizó el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), arrojan datos muy similares para 2009, 2008 y con ligeras variaciones también al resto de las mediciones anteriores.

Cuadro 5
Delitos denunciados con averiguación previa y “cifra negra”



- En 2004 la información disponible es sobre el último delito del grupo de cada persona.
- En 2007, 2008 y 2009 los porcentajes se basan en todos los delitos captados en la encuesta.
- Como se aprecia, se presenta la cifra negra definida como la no averiguación previa.
- En ENSI-3 (2004) no se preguntó sobre la averiguación previa.
- Por efecto de redondeo en un año debe sumar siempre exactamente el 100%.

Fuente: ICESI.www.icesi.org.mx

Una de las conclusiones del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) al respecto es que: “El hecho de que los ciudadanos no denuncien tiene importantes consecuencias para el sistema de procuración y administración de justicia. La percepción que la ciudadanía tiene sobre este sistema y sus autoridades puede ser un factor que opere de forma negativa en contra de la información oficial en lo que respecta a los índices delictivos. Así, por ejemplo, las autoridades pueden dar a conocer una disminución en el número de delitos (con base sólo en las denuncias) y encontrar una barrera de incredulidad por parte de los ciudadanos”.¹¹

Si se analiza el asunto de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia y seguridad en función de su complejidad, el asunto es más grave de lo que parece. Ya no se trata sólo de que una parte del Estado esté bajo la duda permanente de los ciudadanos, sino que lo que está en riesgo es, incluso, que se erosionen y pierdan también legitimidad y eficacia en otro tipo de instituciones, incluyendo las que le dan vida a la democracia. El argumento planteado aquí no es sencillo y su importancia amerita una explicación más amplia.

La tesis anterior, que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia puede afectar, en caso de no subsanarse, mejorarse o corregirse, los fundamentos del Estado democrático, sostiene que en el ejercicio de la función constitucional de proveer seguridad pública a los mexicanos, la transición en el poder de un partido a otro, ya sea en el ámbito nacional o en los locales, no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de seguridad, si se toman en cuenta las cifras de delitos registrados, las tasas de criminalidad, las cifras de victimización y los resultados de la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

A partir de los datos que muestran las propias encuestas ENSI o CIDENA 2011 resulta evidente que tanto a nivel federal como a nivel estatal, y sobre todo a nivel municipal, los gobiernos respectivos no han logrado revertir las condiciones de inseguridad. Por el contrario, en el mejor de los casos se observa un estancamiento de la situación, y en el peor los indicadores disponibles demuestran un deterioro de las condiciones de seguridad en México.

Ante esta situación se abren nuevas interrogantes que requieren de mayor investigación. Una de ellas es la relación existente entre seguridad y democracia. ¿Hasta qué punto las condiciones de inseguridad afectan el desarrollo democrático? Si la variable de la alternancia partidista no modificó sustancialmente las condiciones de seguridad, ¿dónde radica entonces el cambio que se requiere para tener políticas e instituciones de seguridad más eficaces? De no realizarse cambios sustanciales en las modalidades de formular políticas públicas en materia de seguridad, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia? El hecho de que los ciudadanos vivan con un temor permanente hacia el delito, ¿qué consecuencias sociales tiene en su vida cotidiana y respecto de la calidad de la democracia a la cual se aspira, así como en el respaldo a las instituciones legalmente constituidas?

¹¹ Mario Arroyo, ENSI 5-2008, *Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad: Resultados*, Cuadernos del ICSI, núm. 1, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, México, 2009, p. 44.

Sobre este último punto existen, aunque escasos, algunos resultados de investigaciones que señalan que no existe una correlación directa entre seguridad y democracia. De acuerdo con Pablo Parás, en un estudio que realizó en la ciudad de México, entre mayor es el número de víctimas directas del delito éstas “se sentirán menos seguras, serán menos proclives a confiar en los otros y evitarán realizar ciertas actividades sociales de importancia. La información también señala que estos efectos pueden afectar a la democracia debilitando la confianza institucional y aumentando la preferencia por los sistemas autoritarios.”¹²

Aun cuando no hay todavía respuestas plausibles del porqué los ciudadanos no suelen asociar el mal desempeño de sus gobernantes en materia de seguridad pública con la política, y después sancionarlos negativamente en las urnas en lugar de abstenerse de participar electoralmente, sí existen algunos elementos de preocupación como el hecho de que dentro de la evaluación de confianza que se hace de las instituciones en México son precisamente varios de los actores involucrados en la arena democrática, y que tienen una responsabilidad directa en llevar a los gobernantes al poder, así como en emitir o aplicar leyes de seguridad, quienes resultan los peor evaluados: los partidos políticos, los diputados y la policía.

Conclusiones

El inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007, además de ser un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad, significó una modificación en el pensamiento y forma de vida de los mexicanos. Al analizar la opinión y las percepciones de la población relacionadas con el tema del narcotráfico en la Encuesta CIDENA 2011 hay elementos reveladores para poder arrojar resultados. En lugares con presencia activa de organizaciones criminales, la percepción de seguridad en presencia de las fuerzas armadas y la modificación de conductas cotidianas pueden ser adjudicadas a las dos variables: la presencia de las tropas en las calles de muchos pueblos y ciudades, y por la situación real de violencia que existe en cada localidad. Esta experiencia para la población es inédita y en ocasiones estas percepciones están determinadas de forma importante por la experiencia personal o cercana de cada encuestado, pero también hay una influencia importante de los medios de comunicación, por la saturación de información sobre el fenómeno. Esto es claro en la ciudad de México, donde no hay ni actividad violenta de los carteles de forma significativa ni militares en las calles.

Sin embargo, sobre cuestiones como la opinión acerca de si el gobierno está ganando o no la guerra, o si con el combate contra el narcotráfico se obstaculiza la consolidación de la democracia, se observa un espectro de opinión dividida; la optimista, la pesimista

¹² Pablo Parás. “Unweaving the Social Fabric: the Impact of Crime on Social Capital.”, en Wayne A. Cornelius y David Shirk (editores), *Reforming the Administration of Justice in México*. University of Notre Dame Press, Indiana, 2007, p. 341.

y la intermedia. En estos casos es difícil percibir qué determina cada tipo de respuesta, pues más allá de ser opiniones basadas en experiencias personales o concretas, éstas incluyen entre otras variables la influencia de los medios, la información disponible, los antecedentes y la ideología de cada encuestado, así como su grado de confianza en el gobierno. Por ello, este abanico de respuestas se puede interpretar como un espejo de la opinión nacional dividida.

Otra información novedosa e interesante de la encuesta es la que se desprende de la pregunta sobre qué sería lo mejor para solucionar el problema del narcotráfico y sobre la posibilidad de votar por candidatos relacionados con el narcotráfico o por aquellos que lo combaten. En estas opiniones podemos apreciar tendencias claras sobre lo que la mayoría de la sociedad mexicana rechaza. A pesar de estar influenciada por diversas cuestiones, la población se siente asolada y mantiene una opinión extendida a nivel nacional de reprobación del narcotráfico.

Estos resultados, además de reveladores, pueden extenderse a un análisis de contraste con las condiciones históricas que prevalecían al momento de la aplicación de la encuesta en los distintos estados y en el Distrito Federal. En particular, debería profundizarse en un análisis sobre los índices delictivos registrados (cifra oficial) y sobre la incidencia en la victimización (cifra oculta) que registran las encuestas de victimización realizadas por otras instituciones. La riqueza de la Encuesta CIDENA 2011 está en que abre nuevas posibilidades para la investigación y el análisis sobre cómo se construye la opinión de la sociedad sobre el narcotráfico, y en cómo impacta este hecho en la percepción que los ciudadanos tienen de su propia seguridad, la del país, e incluso en cómo ésta define o influye también en la visión que se tiene de la democracia en México.

En conjunto, resultan notables la desconfianza hacia las instituciones de seguridad civiles; el sentimiento de inseguridad y de miedo al delito por parte de los ciudadanos; la poca confianza en la democracia; la alta percepción de la corrupción de las autoridades; y la consideración de que la seguridad pública es el principal problema del país. Todo ello abre una situación de conflicto potencial, en tanto que las respuestas ofrecidas a través de políticas públicas se siguen postergando o no son bien apreciadas por la población. Los efectos de esta situación pueden anticipar un deterioro aún mayor de la percepción positiva que los ciudadanos tienen de la democracia, que podría reflejarse en una baja participación ciudadana en general en los asuntos públicos, la seguridad incluida, dejando una ventana de oportunidad para que los partidos políticos, a pesar de su baja confianza y credibilidad ciudadana sigan siendo, a pesar de todo, los actores principales de la vida pública. Así, se genera un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representan medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.